



MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

**Proceso Selectivo para el
Acceso al Cuerpo Especial
de Instituciones
Penitenciarias**

O.E.P. 2014

1º EJERCICIO

Enero 2015





MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Por favor, no abra este cuadernillo
hasta que se le indique.

No responda en este cuadernillo

Gracias.



1. **Tras la dimisión del Presidente del Gobierno, el Gobierno cesa quedando en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. El Presidente del Gobierno en funciones podrá:**
 - A. Plantear una cuestión de confianza.
 - B. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
 - C. Proponer al Rey el nombramiento de nuevos Ministros.
 - D. Proponer al Rey la disolución de las Cortes Generales.

2. **El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo está formado por:**
 - A. Los miembros del Comité ejecutivo del Banco Central Europeo, exclusivamente.
 - B. Los miembros del Comité ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros.
 - C. Los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, exclusivamente.
 - D. Los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro y los miembros del Comité ejecutivo del Banco Central Europeo.

3. **El sistema de financiación de los Regímenes que integran el sistema español de Seguridad Social es:**
 - A. Sistema de capitalización.
 - B. Sistema de reparto.
 - C. Sistema de copago sanitario.
 - D. Sistema de capitalización, como regla general y el de reparto en los casos de muerte o incapacidad permanente.

4. **En relación con lo dispuesto en la Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señale la opción incorrecta:**
 - A. Conforme al artículo 26 de esta Ley, mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerada corrección es un principio de actuación al que adecuarán su actividad las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del título II de esta Ley.
 - B. El acoso laboral está tipificado como infracción muy grave en el artículo 29 de esta Ley.
 - C. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas será el competente para la imposición de sanciones cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.
 - D. Las disposiciones relativas al Portal de la Transparencia entrarán en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

5. Según el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los pliegos de cláusulas administrativas de los procedimientos de contratación se determinará el importe de la garantía provisional, que no podrá ser superior a un:
- A. Tres por cien del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
 - B. Ocho por cien del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
 - C. Diez por cien del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
 - D. Cinco por cien del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:
- A. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día de la publicación de la disposición impugnada.
 - B. El plazo para interponer recurso contencioso administrativo será de tres meses, si el acto administrativo que ponga fin a la vía administrativa no fuera expreso.
 - C. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho, siempre que no hubiera habido requerimiento previo intimando su cesación.
 - D. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por disposición reglamentaria se disponga otra cosa.
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, no le corresponde a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas:
- A. Mantener relaciones permanentes con las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
 - B. Proponer al Pleno del Tribunal la elección y remoción de los cargos de Secretario general, Interventor y Director y adjuntos del Gabinete Técnico.
 - C. Ejercer, en materia de personal y régimen de trabajo, las facultades que le atribuye esta Ley y las no reservadas específicamente al Pleno, al Presidente del Tribunal o a Órganos de la Administración del Estado.
 - D. Establecer las directrices técnicas a que deben sujetarse los diferentes procedimientos de fiscalización.

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 336.3, apartado segundo, del Reglamento Penitenciario de 1981, vigente en virtud de la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, con rango de resolución del Centro Directivo, todas las anotaciones o diligencias que han de constar en las hojas de vicisitudes de los expedientes personales de los internos, irán autorizadas con la firma del:

- A. Funcionario de la oficina, del Jefe de Oficina cuando corresponda, la del Subdirector de Tratamiento y el Visto Bueno del Director.
- B. Funcionario de la Oficina, la del Jefe de la Oficina de Gestión, la del Subdirector de Tratamiento cuando se refiera a vicisitudes de clasificación y el Visto Bueno del Director.
- C. Funcionario de la oficina, la del Subdirector de Tratamiento, la del Subdirector de Régimen y el Visto Bueno del Director.
- D. Funcionario de la oficina, la del Jurista-criminólogo cuando corresponda, la del Subdirector y el Visto Bueno del Director.

9. A tenor de lo dispuesto en el Código Penal vigente y en relación con la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, señale la afirmación incorrecta:

- A. La suspensión de la ejecución de la pena no será extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito.
- B. Será condición necesaria que la pena o penas impuestas no sea superior a dos años, incluyendo en tal cómputo la derivada del impago de multa.
- C. Para dejar en suspenso la ejecución de la pena, será necesario que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado, salvo que el Juez o Tribunal Sentenciador declare la imposibilidad de que el condenado haga frente a las mismas.
- D. En los delitos que solo pueden ser perseguidos previa querrela del ofendido, el Juez o Tribunal oír a éste, o a quien lo represente, antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución.

10. Para vetar o enmendar un Proyecto de Ley del Congreso de los Diputados, el Senado dispone de un plazo de:

- A. Un mes, a partir de la recepción del texto, salvo que haya sido declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, en cuyo caso será de quince días.
- B. Veinte días naturales, cuando haya sido declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
- C. Un mes, en cualquier caso.
- D. Dos meses, salvo en el caso que haya sido declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, que será de un mes.

11. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde:

- A. Al Secretario de Estado de Presidencia o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia.
- B. A un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia.
- C. Al Secretario del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia.
- D. Al Subsecretario de la Presidencia o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia.

12. En la actualidad, el cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad lo ejerce:

- A. Javier Solana Madariaga.
- B. Federica Mogherini.
- C. Catherine Ashton.
- D. Jürgen Trumpf.

13. Según dispone el artículo 89 del Código Penal vigente:

- A. Las penas privativas de libertad igual o inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, aprecie razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España.
- B. La expulsión no conllevará el archivo de los procedimientos administrativos que tuvieran por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
- C. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de tres a diez años, contados desde la fecha de la resolución de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.
- D. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.

14. De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

- A. Los informes que se soliciten serán vinculantes.
- B. Los informes que se soliciten serán evacuados con carácter general en el plazo de 15 días.
- C. Los informes emitidos fuera de plazo podrán no ser tenidos en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
- D. Con carácter general, no se podrán seguir las actuaciones hasta la emisión del informe solicitado.

15. Conforme a las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, señale la respuesta incorrecta:

- A. El otorgamiento de una subvención requiere la aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
- B. Las bases reguladoras de cada tipo de subvenciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado o en diario oficial correspondiente.
- C. En el otorgamiento de una subvención es necesaria la fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico.
- D. Es necesario acuerdo del Consejo de Ministros para autorizar subvenciones de cuantía superior a 10 millones de euros.

16. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, requerido un expediente administrativo por el órgano jurisdiccional competente, la Administración deberá remitirlo en un plazo de:

- A. Veinte días, a contar desde la fecha del escrito de requerimiento.
- B. Veinte días, improrrogables, desde que el requerimiento tenga entrada en el registro general del órgano requerido.
- C. Veinte días, prorrogables a solicitud de la Administración, desde que el requerimiento tenga entrada en el registro auxiliar del órgano requerido.
- D. Diez días, improrrogables, a contar desde el día en que la Administración reciba el requerimiento.

17. De acuerdo con el artículo 155 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, si el órgano gestor plantea discrepancia ante un reparo, no le corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado conocer la discrepancia:

- A. Si el reparo ha sido formulado por la Intervención General de la Defensa.
- B. Si el reparo ha sido formulado por la Intervención General de la Seguridad Social.
- C. Si el reparo ha sido formulado por una intervención Delegada del Ministerio de Defensa.
- D. Cuando la Intervención General de la Defensa, haya confirmado el reparo de una intervención delegada de su Ministerio y subsista la discrepancia.

18. De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo, de la Disposición Adicional quinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, será competente para conocer de un recurso de apelación contra una resolución judicial en materia de clasificación:

- A. El Tribunal sentenciador.
- B. El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
- C. La Audiencia Provincial.
- D. La sala de lo penal del Tribunal Supremo.

19. La condena a 25 días de trabajos en beneficio de la comunidad es pena:

- A. Grave.
- B. Muy grave.
- C. Menos grave.
- D. Leve.

20. Según el artículo 43. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, una vez solicitado por el interesado el certificado acreditativo del silencio producido, el órgano competente para resolver deberá emitirlo en el plazo máximo de:
- A. Diez días, desde el día en que se solicita el certificado.
 - B. Un mes.
 - C. Diez días, desde el día en que se produjo el silencio administrativo.
 - D. Quince días.
21. El Delegado del Gobierno en una Comunidad Autónoma recibe asesoramiento para la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización de los recursos a los que se refiere el artículo 25 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de:
- A. Los Secretarios Generales Técnicos en aquellas Comunidades Autónomas de carácter pluriprovincial.
 - B. Los Subdelegados del Gobierno en el caso de Comunidades Autónomas uniprovinciales.
 - C. La Comisión territorial de asistencia en la correspondiente Comunidad Autónoma.
 - D. El Director de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
22. Para encontrar una solución extrajudicial a las denuncias presentadas por los consumidores y empresas, relativas a una aplicación incorrecta de la legislación del mercado interior por las administraciones públicas, la Unión Europea ha desarrollado una red de resolución de conflictos, recogida en la Recomendación de la Comisión de 7 de diciembre de 2001, denominada:
- A. Red SARA.
 - B. Red SOLVIT.
 - C. Red.es.
 - D. Red IMI.
23. El artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su Integración social, dispone que es infracción leve:
- A. La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable.
 - B. El retraso, hasta seis meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado.
 - C. Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, cuando no se cuente con permiso de residencia temporal.
 - D. Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.

24. Señale la respuesta incorrecta. En relación con el recurso extraordinario de revisión previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

- A. El órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión será el órgano administrativo que dictó el acto impugnado.
- B. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá en un plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
- C. Cuando al dictar un acto administrativo definitivo en vía administrativa se hubiere incurrido en un error de hecho, que resulte de documentos no incorporados al expediente, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada.
- D. Se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión si trascurrido el plazo de tres meses desde su interposición no se hubiera dictado ni notificado la resolución.

25. Conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, señale la respuesta incorrecta:

- A. La concesión es una modalidad de contratación de la gestión de los servicios públicos
- B. En la contratación de la gestión de los servicios públicos en la modalidad de gestión interesada, la Administración y el empresario participarán a partes iguales en el resultado de la explotación del servicio.
- C. La sociedad de economía mixta en la que la Administración participe por sí o por medio de una entidad pública, es una modalidad de contratación de la gestión de los servicios públicos.
- D. El concierto con persona natural o jurídica es una modalidad de contratación de la gestión de los servicios públicos.

26. Conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la estructura de los estados de ingresos de acuerdo a su clasificación económica distinguirá entre:

- A. Los ingresos correspondientes a la Administración General del Estado y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la Seguridad Social y los de otras entidades.
- B. Los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades, según proceda.
- C. Los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.
- D. Los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.

27. Conforme al Anexo II de la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica, al concepto 226 (Gastos Diversos), subconcepto 09, se imputarán los gastos ocasionados por:

- A. Oposiciones y pruebas selectivas.
- B. Actividades culturales y deportivas.
- C. Publicidad y propaganda.
- D. Atenciones protocolarias y representativas.

28. Conforme al artículo 103.7 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, las propuestas de clasificación inicial formuladas por la Junta de Tratamiento tendrán la consideración de resoluciones de clasificación inicial a todos los efectos cuando se trate de:
- A. Acuerdos unánimes de segundo o tercer grado, en condenas de hasta un año.
 - B. Acuerdos unánimes en condenas de hasta un año con el mismo centro de destino.
 - C. Acuerdos de segundo o tercer grado de tratamiento en condenas de hasta doce meses.
 - D. Acuerdos unánimes de primer o segundo grado, y para condenas no superiores a un año.
29. Cuando el peculio es gestionado por la Administración Penitenciaria, los intereses que genere la cuenta fondo de peculio se ingresarán en:
- A. La cuenta restringida de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
 - B. El Tesoro Público.
 - C. La cuenta del Banco de España del Centro Penitenciario.
 - D. Las cuentas individualizadas de los internos del Centro.
30. La utilización de los medios coercitivos, según el artículo 72.3 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero:
- A. Salvo que razones de urgencia no lo permitan, serán previamente autorizados por el Director, quien lo comunicará al Juez de Vigilancia inmediatamente.
 - B. Serán autorizados por el Jefe de Servicios, recibiendo órdenes del Subdirector de Seguridad.
 - C. Serán autorizados por el Subdirector de Seguridad quien lo comunicará inmediatamente al Director.
 - D. Serán comunicados por el Director a la Inspección para su ulterior autorización.
31. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al:
- A. Ministerio de la Presidencia.
 - B. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
 - C. Consejo de Estado.
 - D. Consejo de Ministros.
32. La primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, en el marco de los artículos 9, 10, 14, y 49 de la Constitución, fue la:
- A. Ley 51/1982, de 2 de diciembre.
 - B. Ley 13/1982, de 7 de abril.
 - C. Ley 49/1982, de 26 de diciembre.
 - D. Ley 27/1982, de 23 de octubre.

33. Señale la opción incorrecta. Las leyes de bases reguladas en el Título III de la Constitución española:

- A. Tienen por objeto la formación de textos articulados.
- B. Delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa.
- C. En ningún caso podrán autorizar la modificación de la propia Ley de bases.
- D. Podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

34. En relación con el dictamen del Consejo de Estado en el procedimiento general de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado, señale la respuesta incorrecta:

- A. Si fuera preceptivo, el instructor lo recabara del Consejo de Estado una vez concluido el trámite de audiencia.
- B. Si fuera preceptivo, el instructor propondrá al órgano competente que se recabe dicho dictamen.
- C. El dictamen se emitirá en un plazo máximo de dos meses.
- D. No es preceptivo en todos los casos.

35. Conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contrato de gestión de servicios públicos:

- A. Podrá ser indefinido.
- B. Podrá tener carácter perpetuo.
- C. Su duración no podrá exceder de veinticinco años cuando comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios, salvo que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se establezcan prórrogas por un plazo superior.
- D. Su duración, incluidas prórrogas, no podrá exceder de veinticinco años cuando comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

36. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dictó en desarrollo de lo indicado en:

- A. El artículo 131 de la Constitución que establece que el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
- B. El artículo 134.1 de la Constitución que establece que corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
- C. La Disposición Adicional Única de la Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011.
- D. El artículo 135.2 de la Constitución que establecía que los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

37. Según el artículo 109.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los fondos de anticipo de Caja Fija situados en cuentas corrientes en entidades de crédito distintas al Banco de España, abiertas con autorización de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, tendrán el privilegio de inembargabilidad que señala el artículo 23 del mismo texto legal:
- A. Sólo si el contrato de servicio establecido con la Entidad de Crédito lo indica en sus cláusulas de prescripciones administrativas.
 - B. Siempre.
 - C. Nunca, los fondos de anticipo de caja fija tienen carácter extrapresupuestario y por tanto son susceptibles de embargo.
 - D. Salvo disposición judicial en contra.
38. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, dentro de las formas especiales de ejecución, no se encuentra el internamiento en:
- A. Unidades psiquiátricas penitenciarias.
 - B. Unidades para cumplimiento de las medidas de seguridad.
 - C. Unidades de madres.
 - D. Departamentos para jóvenes.
39. A tenor de lo dispuesto en el artículo 316.2, del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, se remitirá inventario de los lotes higiénicos al centro directivo:
- A. Mensualmente.
 - B. Bimestralmente.
 - C. Trimestralmente.
 - D. Semestralmente.
40. Indique la respuesta incorrecta. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, previo a la interposición del contencioso administrativo, los actos relacionados en el apartado 2 del artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuando se refieran a los siguientes tipos de contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas y las entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:
- A. Contratos de obras, concesión de obras públicas y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada.
 - B. Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 150.000 euros.
 - C. Contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años.
 - D. Contratos de suministro, de servicios, de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado, sujetos a regulación armonizada.

41. Como norma general, los servicios territoriales de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos se integrarán:

- A. En las Subdelegaciones del Gobierno.
- B. En las Administraciones autonómicas.
- C. Bajo la dependencia directa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
- D. En las Delegaciones del Gobierno.

42. En virtud de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, con el objetivo de racionalizar la organización de la Administración y evitar duplicidades entre organismos administrativos, se acuerda:

- A. La integración de las competencias de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dentro de los cometidos y estructura del Instituto de la Mujer.
- B. La integración de las competencias de la Comisión Interministerial de igualdad entre mujeres y hombres dentro de los cometidos y estructura del Instituto de la Mujer.
- C. Que la Dirección General para la igualdad de Oportunidades será un órgano consultivo de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
- D. La integración de las competencias de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dentro de los cometidos y estructura de la Comisión Interministerial de igualdad entre mujeres y hombres.

43. Conforme a lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Constitución española, la apreciación de la necesidad de dictar una ley de armonización, por interés general, corresponde al/ las:

- A. Senado, por mayoría simple.
- B. Congreso de los Diputados, por mayoría simple.
- C. Cortes Generales, por mayoría simple del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
- D. Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara.

44. En el procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización solicitada por el particular cuando desde el inicio del procedimiento no haya recaído resolución y hubieran transcurrido:

- A. Quince días.
- B. Treinta días.
- C. Veinte días.
- D. Dos meses.

45. En relación con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta:

- A. Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales.
- B. Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que careciesen de dueño.
- C. La gestión y administración de los bienes demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán, entre otros, al principio de identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
- D. La gestión y administración de los bienes patrimoniales por la Administraciones públicas se ajustará, entre otros, al principio de dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.

46. Según lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado no se acompañará:

- A. Un anexo con el desarrollo económico de los créditos, por centros gestores de gasto.
- B. Las memorias explicativas de los contenidos de cada presupuesto, con especificación de las principales modificaciones que presenten en relación con los vigentes.
- C. Un anexo resumen de los procedimientos de control realizados de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- D. Un anexo, de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública, que incluirá su clasificación territorial.

47. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los órganos competentes para formar y para examinar y comprobar la Cuenta General del Estado serán, respectivamente:

- A. El Consejo de Ministros y el Tribunal de Cuentas.
- B. El Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados.
- C. La Intervención General de la Administración del Estado y, por delegación de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas.
- D. El Tribunal de Cuentas y el Congreso de los Diputados.

48. En relación con los internos extranjeros y a la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde radique el centro penitenciario en el que cumplen condena, el Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, prevé que la Administración Penitenciaria:

- A. No prevé nada al respecto.
- B. Sólo tiene la obligación de facilitarles los medios adecuados para aprender la lengua cooficial.
- C. Sólo procurará los medios para aprender el castellano.
- D. Procurará facilitar los medios para aprender el castellano y la lengua cooficial.

49. En el caso de traslado de centro, los internos que hayan realizado un trabajo en un centro penitenciario, si éste ha sido valorado positivamente por el centro de procedencia, tendrán prioridad a la hora de acceder a puestos de trabajo vacantes del centro penitenciario de destino, cuando se haya desempeñado por un periodo superior a:
- A. Dos meses.
 - B. Un año.
 - C. Seis meses.
 - D. Tres meses.
50. Con carácter general, en el procedimiento general de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización solicitada por el particular cuando desde el inicio del procedimiento no haya recaído resolución expresa en un plazo de:
- A. Un año.
 - B. Tres meses.
 - C. Treinta días.
 - D. Seis meses.
51. El anteproyecto de Ley de creación de un Organismo público que se presente al Gobierno deberá ser acompañado de una propuesta de Estatutos y del Plan inicial de actuación del Organismo. Este último deberá ser aprobado por:
- A. El titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
 - B. El Director General de la Función Pública.
 - C. El titular del Departamento ministerial del que dependa.
 - D. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
52. Según dispone el artículo 3 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, la Comisión de Estrategia TIC:
- A. Se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
 - B. Se adscribe al Ministerio de la Presidencia.
 - C. Su pleno estará presidido por el Secretario de Estado de Administraciones Públicas.
 - D. Su pleno estará presidido por el Secretario de Estado de la Presidencia del Gobierno.
53. El proyecto de un Reglamento no necesitará ir siempre acompañado de:
- A. Un informe sobre la necesidad y oportunidad de aquél.
 - B. Un informe de la Secretaría General Técnica correspondiente.
 - C. Una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar.
 - D. Un informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

54. Según establece el artículo 70 de la Ley 7/ 2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse:

- A. En el año natural en que haya sido aprobada la oferta de empleo público, en todo caso.
- B. Antes de finalizar el ejercicio correspondiente a dicha Oferta.
- C. Dentro del plazo improrrogable de 3 años, en todo caso.
- D. Dentro del plazo improrrogable de 2 años.

55. De acuerdo con lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en relación con la afectación de bienes y derechos:

- A. Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado no podrá ser objeto de afectación a más de un uso o servicio de la Administración General del Estado.
- B. La afectación va implícita en la adscripción de bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado a los Organismos públicos dependientes de aquélla para su vinculación directa a un servicio de su competencia.
- C. La afectación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado a los departamentos ministeriales compete a la Dirección General del Patrimonio del Estado.
- D. La afectación de los bienes y derechos de los Organismos públicos al cumplimiento de los fines, funciones o servicios que tengan encomendados será acordada por el Ministro de Hacienda.

56. Conforme al Anexo II de la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica, el subconcepto 02, correspondiente al concepto 220, del artículo 22, comprendido a su vez en el Capítulo II de Gastos corrientes en bienes y servicios, está reservado a los gastos ocasionados por:

- A. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
- B. Material de oficina ordinario no inventariable.
- C. Material de oficina en el exterior.
- D. Material informático no inventariable.

57. Según la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, cuál de los siguientes no es uno de los principios contables de carácter económico patrimonial bajo los que se desarrollará la contabilidad pública:

- A. Principio de gestión continuada.
- B. Principio de importancia relativa.
- C. Principio de no compensación.
- D. Principio de estabilidad presupuestaria.

58. En el expediente disciplinario iniciado a un interno, las medidas cautelares podrán ser acordadas motivadamente por:

- A. El instructor del expediente.
- B. El Jefe de Servicios.
- C. El Director.
- D. La Comisión Disciplinaria.

59. Los partes de accidentes de trabajo, cuando se produzcan como consecuencia de los trabajos realizados en cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, serán emitidos por:

- A. Las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad profesional.
- B. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- C. La entidad pública o privada en que desarrolle su actividad de utilidad pública.
- D. El Ministerio del Interior.

60. Una resolución administrativa de carácter particular:

- A. Podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquella tenga inferior rango a ésta.
- B. Podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general cuando tenga superior rango a ésta.
- C. Podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, cuando tenga igual o superior rango a ésta.
- D. No podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquella tenga igual o superior rango a ésta.

61. Señale la respuesta incorrecta. Los Organismos públicos tienen:

- A. Personalidad jurídica pública diferenciada.
- B. Patrimonio propio.
- C. Tesorería propia.
- D. Potestad expropiatoria.

62. El Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba CI@ve, la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado mediante:

- A. Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- B. Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre.
- C. Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre.
- D. Orden PRE/1863/2014, de 3 de octubre.

63. El derecho a formular reservas a un Tratado Internacional:

- A. Es una regla imperativa del Derecho Internacional General y por tanto no puede ser prohibido por un Tratado.
- B. No existe si el propio Tratado lo prohíbe expresamente.
- C. Sólo existe en el ámbito de los Tratados bilaterales.
- D. Sólo puede ejercitarse en el momento de firmar el Tratado.

64. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del Reglamento de Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas, una vez comunicados por los órganos competentes en materia de personal al Registro Central de Personal, los actos, resoluciones o cualquier otra información que deba ser registrada, se practicarán en el Registro los asientos en un plazo máximo de:

- A. Tres días desde la recepción de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la unidad gestora.
- B. Tres días desde el envío de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la unidad gestora.
- C. Cinco días desde la recepción de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la unidad gestora.
- D. Cinco días desde el envío de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la unidad gestora.

65. Conforme al Capítulo II de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta:

- A. Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros.
- B. Los bienes y derechos de dominio público son inembargables.
- C. No podrán someterse a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.
- D. Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado no son enajenables.

66. El Fondo de Contingencia, definido en el artículo 50 de la Ley 47/ 2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es la sección del presupuesto anual de gastos destinada a necesidades inaplazables para las que no existiera la adecuada dotación presupuestaria. Su aplicación se aprobará:

- A. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.
- B. A propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante acuerdo del Consejo de Ministros previamente a la autorización de las respectivas modificaciones de crédito.
- C. Mediante acuerdo del Pleno de las Cortes Generales, a propuesta de su Oficina Presupuestaria.
- D. A propuesta del órgano gestor, mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

67. Conforme establece la Orden de 30 de julio de 1992 sobre instrucciones para la confección de nóminas, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, para justificar el alta en nómina de un contratado laboral de nuevo ingreso no será necesario unir:

- A. Copia de la hoja de servicios.
- B. Copia del plan, propuesta o expediente de contratación sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto.
- C. Certificación de antigüedad expedida por el órgano competente.
- D. Contrato laboral.

68. De acuerdo con lo establecido en el artículo 260. 4 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en los casos de no cumplimiento de la sanción por razones médicas o de otro orden, no imputables al interno:

- A. Los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha de comisión de la infracción.
- B. En este caso no existen plazos de cancelación y la sanción se tendrá por no impuesta.
- C. Los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha en que la sanción pudo haberse cumplido.
- D. Los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha del acuerdo sancionador.

69. La Unión Europea, a través de las subvenciones aportadas por el Fondo Social Europeo, cofinancia gran parte de la formación profesional para el empleo que se imparte en el interior de los Establecimientos Penitenciarios. El Programa Operativo Plurirregional del que la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo recibe esa subvención se denomina:

- A. Marco Estratégico Común.
- B. Lucha contra la Discriminación.
- C. Marco Financiero Plurianual.
- D. Fondo Europeo de Desarrollo.

70. Según la Disposición Adicional sexta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey será:

- A. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
- B. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- C. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- D. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

71. En cuántas Unidades con nivel orgánico de Subdirección General se estructura la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias:

- A. Cinco.
- B. Seis.
- C. Siete.
- D. Ocho.

72. A tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad:

- A. Sobre otros gastos siempre que no superen el 80% del PIB nacional expresados en términos nominales, o el que se establezca en la normativa europea.
- B. Sobre otros gastos siempre que no superen el 70% del PIB nacional expresados en términos nominales, o el que se establezca en la normativa europea.
- C. Absoluta frente a cualquier otro gasto.
- D. Sobre otros gastos siempre que no superen el 60% del PIB nacional expresados en términos nominales, o el que se establezca en la normativa europea.

73. Señale la respuesta incorrecta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 42. 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para resolver y notificar se podrá suspender cuando:

- A. Deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
- B. Deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
- C. Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimientes propuestos por la Administración, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
- D. Se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la Administración a los interesados.

74. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 7/ 2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el interesado podrá solicitar la rehabilitación de la condición de funcionario, que le será concedida, una vez desaparecida la causa objetiva que motivó la extinción de la relación de servicios como consecuencia de la:

- A. Pérdida de nacionalidad.
- B. Jubilación voluntaria.
- C. Jubilación por incapacidad absoluta.
- D. Sanción disciplinaria de separación del servicio.

75. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Expropiación Forzosa, una vez determinado el justo precio se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de:

- A. Tres meses.
- B. Seis meses.
- C. Un mes.
- D. Un año.

76. La figura del anticipo de tesorería prevista en el artículo 60 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, va unida inexcusablemente a la tramitación de un expediente de:

- A. Concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de créditos.
- B. Incorporación a los correspondientes créditos de un ejercicio de los remanentes de crédito del ejercicio anterior.
- C. Ampliación de crédito.
- D. Transferencia o traspaso de dotaciones entre créditos.

77. En cuál de los siguientes supuestos se liquidarán las retribuciones de un funcionario de la Administración General del Estado por días, al ser una excepción al criterio de devengo habitual, establecido en el artículo 34 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado:

- A. En el mes de cese en el servicio activo por fallecimiento.
- B. En el mes correspondiente a la jubilación si pertenece al Régimen de Clases Pasivas del Estado.
- C. En el mes de inicio de licencias con derecho a retribución.
- D. En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala.

78. Conforme a lo dispuesto en el artículo 241.3 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, el Director deberá acordar siempre la apertura de una información previa a la incoación de un expediente disciplinario cuando:

- A. Medie motín, plante o desorden colectivo grave.
- B. Un interno formule denuncia fundada de hechos susceptibles de sanción disciplinaria.
- C. De los hechos ocurridos se produzca el resultado de muerte.
- D. Así se lo solicite el Instructor del expediente disciplinario.

79. A tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional octogésimo séptima de la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas al Tribunal de Cuentas, la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo estará sometida:

- A. Al control financiero permanente y auditoría pública previsto en la Ley General Presupuestaria.
- B. A la auditoría privada prevista en la Ley General Presupuestaria.
- C. A la fiscalización previa y al control financiero previsto en la Ley General Presupuestaria.
- D. A la fiscalización previa, al control financiero permanente y auditoría pública previsto en la Ley General Presupuestaria.

80. Velar por el cumplimiento de las directrices de la política exterior del Gobierno corresponde:

- A. Al Presidente del Gobierno.
- B. A las Comisiones Delegadas del Gobierno.
- C. Al Consejo de Ministros.
- D. Al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

81. El diseño, implantación, seguimiento y evaluación de los programas de intervención destinados a los internos en régimen abierto, corresponden a:

- A. La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
- B. La Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas.
- C. La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
- D. La Subdirección General de Medio Abierto.

82. Conforme a lo establecido en el artículo 26 de Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la programación presupuestaria no se registrá por el principio de:

- A. Estabilidad presupuestaria.
- B. Responsabilidad.
- C. Anualidad.
- D. Lealtad institucional.

83. Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional décimo sexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el órgano competente para la revisión de oficio de un acto administrativo nulo dictado por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias será:

- A. El Consejo de Ministros.
- B. El Ministro del Interior.
- C. El Secretario de Estado de Seguridad.
- D. El Juzgado Central de lo Contencioso administrativo.

84. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de:
- A. 550.000 euros, en los de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
 - B. 425.000 euros, en los de suministros.
 - C. 150.000 euros, en los de servicios.
 - D. 125.000 euros, en los contratos administrativos especiales.
85. En la expropiación que dé lugar a traslado de poblaciones, los tipos de indemnización abonables por cada uno de los conceptos que la ley de expropiación forzosa define como perjuicios indemnizables, se fijarán a propuesta del órgano que reglamentariamente se determine por el Consejo de Ministros previo dictamen de:
- A. El Instituto Nacional de Colonización.
 - B. El Jurado Provincial de Expropiación.
 - C. La Comisión Permanente del Consejo de Estado.
 - D. La Comisión General de Evaluación y Riesgos.
86. Según el artículo 73 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la fase del procedimiento de gestión del gasto público a partir de la cual la actuación del órgano gestor del gasto tiene relevancia jurídica para con terceros, se denomina:
- A. Aprobación del gasto.
 - B. Compromiso de gasto.
 - C. Reconocimiento de la obligación.
 - D. Ordenación del pago.
87. Conforme a lo dispuesto en la norma primera del artículo 317 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, los objetos de valor y dinero retenidos a los internos, se custodiarán por:
- A. El Subdirector de Seguridad y Administrador, respectivamente.
 - B. El Funcionario de Ingresos y el Administrador, respectivamente.
 - C. El Administrador, en ambos casos.
 - D. El Jefe de Servicios y el Administrador, respectivamente.

88. En materia de acción social, y a tenor de lo previsto en el artículo 229 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, cuál de las siguientes respuestas es incorrecta:

- A. Los servicios sociales penitenciarios asistirán a las personas que ingresen en prisión.
- B. Por el Consejo de Dirección se regulará el funcionamiento de los servicios sociales penitenciarios y sus relaciones con la Junta de Tratamiento.
- C. Los Trabajadores sociales atenderán las solicitudes que les formulen los internos, los liberados condicionales adscritos al Establecimiento y las familias de unos y de otros.
- D. Los servicios sociales penitenciarios elaborarán una ficha social para cada interno, que formará parte de su protocolo personal.

89. Las instrucciones internas de contratación de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, regulan los procedimientos de contratación aplicables a los contratos a los que se refiere el artículo 4.1.g del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, indicando que se tramitarán por procedimiento abierto los:

- A. Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a los 150.000 €.
- B. Contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a los 150.000 €.
- C. Contratos servicios públicos cuyo valor estimado sea inferior a los 150.000 €.
- D. Contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a los 150.000 €.

90. La facultad de designar al Defensor del Pueblo Europeo recae sobre:

- A. El Parlamento Europeo.
- B. El Consejo Europeo.
- C. La Comisión.
- D. El Consejo.

91. En el ámbito de la Unión Europea, la función legislativa y la función presupuestaria se ejercerán conjuntamente por:

- A. El Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.
- B. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
- C. El Consejo Europeo y la Comisión Europea.
- D. El Parlamento Europeo y el Consejo.

92. La Ley General de Seguridad Social estructura el Sistema de Seguridad Social en:

- A. Régimen General y Regímenes Especiales.
- B. Régimen General, Régimen de Autónomos y Regímenes Especiales.
- C. Régimen General, Regímenes Especiales y Sistemas Especiales.
- D. Régimen General, Regímenes Especiales y Mutualidades de Funcionarios.

93. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no se considerará infracción grave:

- A. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
- B. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
- C. La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
- D. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.

94. En los contratos de obras de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones será:

- A. Como mínimo, de veinte días, contados desde la publicación del anuncio del contrato.
- B. Como mínimo, de quince días, contados desde la publicación del anuncio del contrato.
- C. Como mínimo, de veintiséis días, contados desde la publicación del anuncio del contrato.
- D. Como mínimo, de treinta y seis días, contados desde la publicación del anuncio del contrato.

95. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, qué acto inicia el expediente expropiatorio:

- A. La declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiatorio.
- B. El acuerdo de necesidad de ocupación.
- C. La determinación del justo precio.
- D. La toma de posesión del objeto expropiatorio.

96. Estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 150.2 a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:

- A. Los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores.
- B. Los contratos menores así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual.
- C. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven sus modificaciones.
- D. Los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales a que se refiere la Disposición Adicional novena de la Ley General Presupuestaria.

97. A tenor de lo dispuesto en el artículo 71. 1 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, las medidas de seguridad en los Establecimientos penitenciarios se regirán por los principios de:

- A. Justicia y proporcionalidad.
- B. Racionalidad y justicia.
- C. Necesidad y proporcionalidad.
- D. Eficacia, necesidad y equidad.

98. A tenor de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal vigente, cuál de las siguientes incidencias en el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no se comunicará necesariamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria:

- A. La ausencia del penado al trabajo durante una jornada laboral que suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
- B. El rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible a pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo.
- C. La oposición o el incumplimiento de forma reiterada y manifiesta de las instrucciones que se le dieran por el responsable de la ocupación referida al desarrollo de la misma.
- D. La conducta, que por cualquier otra razón, fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

99. A tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional octogésima séptima de la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado, el presupuesto de gasto de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, tiene carácter:

- A. Estimativo.
- B. Limitativo.
- C. Presupuesto cero.
- D. No estimativo.

100. De acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el órgano competente para ordenar la incoación de un procedimiento sancionador por infracción grave del artículo 29 de dicha ley, cometida por un Secretario de Estado, sería:

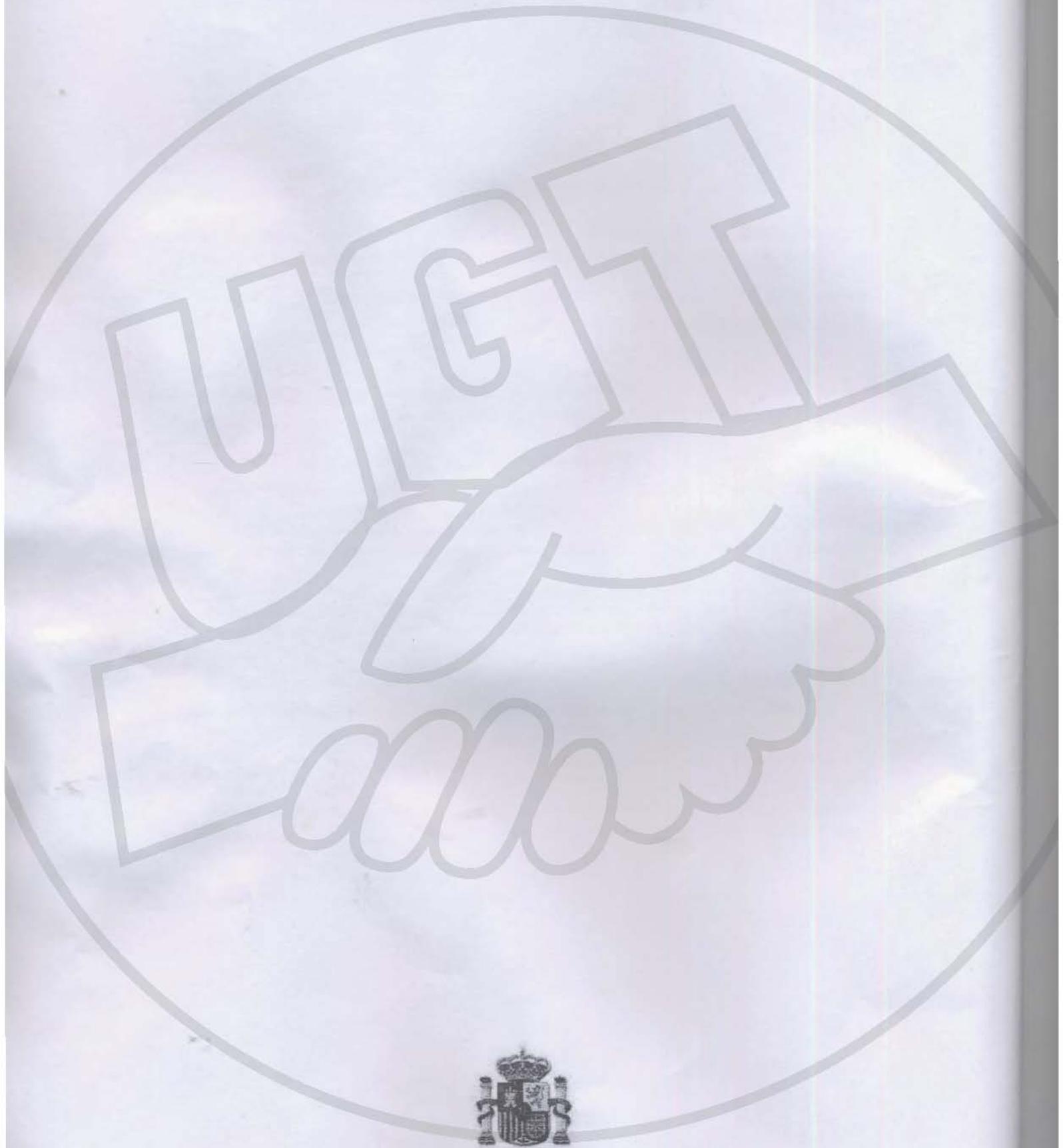
- A. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- B. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Ministro del Departamento al que esté adscrito.
- C. El Ministro de la Presidencia, a propuesta del Ministro del Departamento al que esté adscrito y previo conocimiento del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- D. El Ministro del Departamento al que esté adscrito.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. **El artículo 65 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece la regla de la:**
 - A. Convalidación de actos anulables.
 - B. Conversión de actos nulos o anulables.
 - C. Conservación de actos y trámites.
 - D. Transmisibilidad de actos nulos.

2. **Según el artículo 32 de la Ley de Expropiación Forzosa, no formará parte del Jurado Provincial de Expropiación que se constituirá en cada capital de provincia:**
 - A. El interventor territorial de la provincia o persona que legalmente le sustituya.
 - B. Un Notario de libre designación por el decano del Colegio Notarial correspondiente.
 - C. Un representante del Ministerio Fiscal.
 - D. Un Magistrado que designe el Presidente de la Audiencia correspondiente.

3. **En el procedimiento general de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado, los informes que solicite el instructor:**
 - A. Serán emitidos, en todo caso, en el plazo de diez días.
 - B. Serán emitidos en el plazo de diez días, pudiendo prorrogarse, pero dicha prórroga no será en ningún caso superior a veinte días.
 - C. Serán emitidos en el plazo de veinte días, pudiendo el instructor solicitar su emisión en un plazo mayor pero nunca menor.
 - D. Serán emitidos en un plazo de diez días, pudiendo el instructor solicitar su emisión en un plazo menor o mayor, pero nunca superior a un mes.



MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS